



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA
ALBA LUCÍA GOYENECHE GUEVARA

Medellín, veinticinco de julio de dos mil veintitrés.

PROCESO	Ejecutivo
DEMANDANTE	Francisco León Restrepo Saldarriaga
DEMANDADO	María Isabel Arango Restrepo
PROCEDENCIA	Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín
CUDR	05001-31-03-008-2014-00340-01
RADICADO INTERNO	029-23
PROVIDENCIA	139-23
DECISIÓN	Cuando en un proceso se haya emitido sentencia favorable al demandante, o auto ordenando seguir adelante con la ejecución, y permanezca inactivo en la secretaría del Despacho por más de dos (2) años, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, se le aplicará el desistimiento tácito. CONFIRMA.

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandante en contra del auto del 16 de agosto de 2022, mediante el cual se declaró terminado por desistimiento tácito el presente proceso ejecutivo instaurado por Francisco León Restrepo Saldarriaga en contra de María Isabel Arango Restrepo, por haber transcurrido más de dos (2) años de inactividad.

Busca la parte actora que se revoque la decisión de primer grado, para que en su lugar se continúe con el trámite del proceso.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

1. Es admisible el trámite de la alzada, por expresa previsión del artículo 321, numeral 7º del Código General del Proceso.

2. Del Desistimiento tácito. La terminación por desistimiento tácito se encuentra contemplada en el artículo 317 del Código General del Proceso, vigente a partir del 1° de octubre de 2012, por mandato del numeral 4° del artículo 627 de la misma obra.

De acuerdo con el citado precepto, el desistimiento tácito es la consecuencia jurídica que ha de aplicarse, a modo de sanción, respecto de la parte que promovió un trámite, pero no cumplió con una carga procesal -de la cual depende la continuación del proceso- y no la cumple en un determinado lapso (Numeral 1°, art. 317 C. G del Proceso), o cuando el proceso permanece inactivo, esto es, sin ninguna actuación, por el término de un (1) año en la Secretaría del Juzgado, antes de dictarse sentencia (Numeral 2°, *ibídem*), o una vez proferida ésta, o el auto ordenando seguir adelante con la ejecución de ser el caso, si dicha inactividad persiste por un período de dos (2) años (Literal b), numeral 2 del mismo Estatuto).

Dicha normativa establece los anteriores supuestos, pero con relación a cada uno impone ciertos mandatos para el Juzgado, al tiempo que consagra cómo la parte puede impedir la finalización del trámite. Ciertamente, en el primer motivo, la simple inactividad sin sentencia, la regla no contempla un tiempo específico para declarar el Desistimiento tácito, pero si establece que la forma de evitarlo es cumplir con la carga procesal pendiente, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento efectuado por el Juzgado para ese efecto.

En cambio, en las restantes causas se dijo cuál era el tiempo de inactividad, pero la superación de ésta se amplió a cualquier actividad, de cualquier naturaleza, desde luego, que impulsara el proceso, y sin que mediara requerimiento alguno. En esta medida, la parálisis de un año, sin sentencia, o de dos años, con sentencia, obliga a verificar que la inactividad procesal sea total o, de haber actividad, ésta no conduzca a pasar el proceso de una etapa a otra.

Tal como viene de explicarse, el canon 317 del Código General del Proceso contempla tres presupuestos diferentes, para la procedencia de la terminación anormal del proceso por la figura de desistimiento tácito, atendiendo al estado en el que se encuentre el mismo. Ellos son, se reitera:

- Cuando no se ha dictado sentencia y el proceso se encuentra pendiente de una actuación o impulso del promotor de la actuación. En este caso, la norma

establece un procedimiento previo a la terminación del proceso, consistente en el requerimiento que debe hacer el Juzgado a dicha parte para que proceda a cumplir con la carga que le corresponde en un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la providencia que así lo disponga, so pena de declarar el desistimiento tácito.

- **Cuando no se ha dictado sentencia y el proceso permanece inactivo por un plazo de un año.** Para este evento, no exige la norma como presupuesto que el proceso se encuentre pendiente de una actuación de la parte actora, para continuar con la demanda, como si lo hace para el primero, simplemente que permanezca sin actuación de ninguna naturaleza, por ese período, pudiendo el Despacho proceder a la terminación del mismo por desistimiento tácito, sin requerimiento previo.

- **Cuando ya se ha dictado sentencia o auto que ordena seguir adelante con la ejecución y el proceso permanece inactivo por un período de dos años.** Al igual que el anterior, no se exige en este caso que el proceso se encuentre pendiente de alguna actuación de la parte, solo que no se genere ninguna actuación por ese lapso de tiempo, para declarar el desistimiento tácito.

En los dos últimos casos, el legislador no estableció como presupuesto o requisito que el proceso o actuación estuviese pendiente de una carga procesal o acto de la parte que la haya promovido, sino que solo hizo referencia a la inactividad del proceso, lo que permite colegir, que si bien legalmente no está la parte obligada a cumplir con alguna actuación, si es necesario que realice alguna, de la cual se pueda deducir su interés o atención del proceso, de tal manera que el Juez tenga certeza sobre su continua actividad, encaminada a lograr no sólo la obtención de una resolución del conflicto, sino además, la efectividad de la sentencia o el pago de la prestación insoluta.

Es precisamente por esta razón que la misma preceptiva contempla como una de las reglas que deben atenderse para la aplicación de la figura del desistimiento tácito, que *“cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo”*. Sobre este particular la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC11191-2020 del 9 de diciembre de 2020, Radicación no. 11001-22-01-000-2020-01444-01 definió:

“...la “actuación” que conforme al literal c) del artículo 317 del Código general del Proceso interrumpe los términos para que se decreta su terminación anticipada es aquella que lo conduzca a definir la controversia o a poner en marcha los procedimientos necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer”. Es decir, la actuación debe ser “apta y apropiada para impulsar el proceso hacia su finalidad”, por lo que simples solicitudes de copias o actuaciones sin propósitos serios de solución a la controversia no tienen este efecto al no poner en marcha el proceso...”

3. **Caso concreto.** El togado que representa el demandante, frente a la decisión del juzgado de primer grado de declarar la terminación del proceso por desistimiento tácito, se queja porque en el sistema de gestión judicial, aparece como última actuación el 11 de diciembre de 2019, sin embargo, en el auto que la decreto aludió a que el proceso se encontraba inactivo desde el 23 de enero de 2020, lo que indicar que esta actuación no fue notificada. Expuso que, debe tenerse en cuenta que fueron muchos los meses que se suspendieron los términos por causa de la pandemia, y que varias veces se solicitó al juzgado la continuación del proceso, expidiendo los oficios para radicar en Catastro Municipal con el fin de obtener el avalúo del bien hipotecado, sin obtener respuesta.

En efecto, revisado el expediente digital allegado, se tiene que, por auto del 10 de diciembre de 2019, notificado por estado 12 del mismo mes y año, se dispuso oficiar a la Secretaría de Catastro del Municipio de Santa Fe de Antioquia, a fin de que expidiera los certificados de avalúo catastral actualizados de los bienes inmuebles identificados con M.I. 024-19138 y 024-19139, de propiedad de la demanda María Isabel Restrepo, atendiendo la solicitud presentada el 13 de noviembre de 2019. En esa medida, se trata de la última actuación y, por tanto, es desde allí que debe contar el término que establece la ley para la procedencia o no de la declaratoria del desistimiento tácito.

Ahora, considera la Sala que, hay lugar a la confirmación del decreto de la terminación del presente proceso ejecutivo por desistimiento tácito, por lo que pasará a explicarse.

Los términos judiciales estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, en razón a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID 19, conforme a los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior del a Judicatura, con números PCSJA20-11517, PCSJA20-11518,

PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567. Luego existieron unas nuevas suspensiones de términos de manera esporádica, hasta el tres de julio de 2020, entre el 13 y el 26 de julio de 2020, entre el 31 de julio y dos de agosto de 2020, y, por último, del 7 al 09 de agosto de 2020, todas con ocasión de la aludida pandemia.

Mediante el Decreto 564 del 15 de abril de 2020, por medio del cual “*se adoptaron medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”, se suspendieron los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito, advirtiendo que: “*se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura*”.

Bajo estos parámetros, obligatoriamente debe concluirse que, para el 16 de agosto de 2022, fecha en que se decretó la terminación del proceso por desistimiento, incluso para el 23 de junio de la misma anualidad, cuando se realizó la petición en ese sentido, había fenecido objetivamente el interregno de dos años de inactividad que exige la norma para su decreto, por cuanto desde la reanudación de términos para la aplicación del desistimiento tácito (9 de septiembre de 2020), sumados al interregno transcurrido entre el 13 de noviembre de 2019 (fecha de la última actuación) y el 16 de marzo de 2020, cuando se presentó la primera suspensión de términos, claramente transcurrieron más de dos años.

Como corolario, en el sub júdice, para el momento en que se profirió el auto del 16 de agosto de 2022, se había cumplido el período de dos (2) años de inactividad que prescribe el literal d) del artículo 317 del C. General del Proceso, para la procedencia de la mencionada figura, por tanto, procedía su decreto como lo definió el *a quo*.

En consecuencia, se confirmará la decisión apelada por las razones aquí esgrimidas, sin condena en costas, dada su no causación.

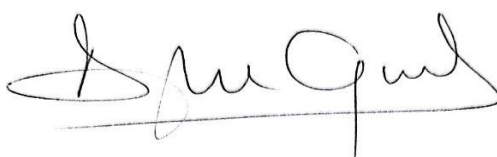
DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL**

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, CONFIRMA el auto proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN, el 16 de agosto de 2022, dentro del proceso ejecutivo instaurado por Francisco León Restrepo Saldarriaga en contra de María Isabel Arango Restrepo.

Sin lugar a condena en costas, dado su no causación.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alba Lucía Goyeneche Guevara', with a horizontal line drawn underneath the signature.

ALBA LUCÍA GOYENECHÉ GUEVARA

Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022